



Radicado No. 20221500039481

Oficio No. DAJ-10400-

19/05/2022

Página 1 de 8

Bogotá, D.C.

Honorable Magistrado

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Correo electrónico: despenal009tutelas2@cortesuprema.gov.co

secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: Contestación acción de tutela

Radicado: CUI 11001020400020220095500

Radicado Interno: 123956

Accionante: Luz Miriam Castaño Quintero

Accionado: Fiscalía General de la Nación y Otros

GABRIELA RAMOS NAVARRO en mi calidad de Coordinadora de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales¹ de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación (en adelante, FGN), de manera respetuosa y atenta, me permito presentar contestación a la tutela de la referencia

I. OPORTUNIDAD PROCESAL

Estas consideraciones son presentadas dentro del término de veinticuatro (24) horas otorgado por su Despacho, mediante auto del doce (12) de mayo de 2022, notificado a la FGN a través de correo electrónico del dieciocho (18) de mayo del 2022. En consecuencia, el plazo finaliza el diecinueve (19) de mayo de 2022.

II. ANTECEDENTES

A. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1. La señora Luz Miriam Castaño Quintero interpone la presente acción de tutela invocando la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital.
2. Señala que es madre cabeza de familia y que desde hace más de 15 años vive en su vivienda en Marinilla, Antioquia, junto con sus 3 hijos de los cuales uno se encuentra en estado de discapacidad.

¹ Oficio Radicado 20221500004783 del 30 de marzo de 2022.

3. Precisa que el 12 de mayo del 2001 en su inmueble fueron hallados 421 gramos de marihuana, los cuales habían sido comprados por uno de sus hijos, Elder Julián Toro Castaño, para el consumo personal.
4. Refiere que con ocasión a lo anterior, su hijo fue declarado responsable penalmente y obligado a pagar multa por medio de la sentencia anticipada del 19 de septiembre de 2011.
5. Por estos hechos, el 31 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación decidió de manera oficiosa iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio de su casa, así como su embargo y secuestro.
6. Expone que mediante sentencia del 24 de julio de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia resolvió no declarar la extinción del derecho de dominio sobre su hogar; particularmente, aduciendo que las razones utilizadas por la Fiscalía para sustentar la extinción de dominio desconocen la protección de trato diferencial a una mujer cabeza de hogar.
7. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, toda vez que consideraron que no cumplía con las condiciones para ser considerada como madre cabeza de familia, desconociendo que ella sola tenía el deber de proveer con los recursos necesarios para la sostenibilidad de sus hijos.
8. Así las cosas, la Sociedad de Activos Especiales SAE le solicitó que entreguen el inmueble para el día 20 de marzo del 2022, so pena de iniciar un desalojo forzoso.
9. Por tal razón afirma que el 28 de marzo del 2022, radicó un derecho de petición ante la Sociedad de Activos Especiales SAE solicitando lo siguiente:

“(…)

- *Teniendo en cuenta que el desalojo puede vulnerar la dignidad humana de una persona con especial protección del Estado, solicito a SAE -SAS se abstenga de realizar cualquier procedimiento o diligencia, hasta tanto se garanticen los derechos de mi hijo con discapacidad en la forma establecida en la Ley y la Constitución.*
- *También solicito a SAE-SAS me informe si en el proceso de entrega y desalojo ha considerado la situación de mi hijo con discapacidad y si esta al tanto de la evidente injusticia que se quiere cometer contra mi familia,*

injusticia que puede evidenciarse con la simple lectura de la sentencia de extinción de dominio.

- *Solicito a SAE-SAS me informe cuales son las etapas y procedimientos que va adelantar para lograr el desalojo forzado de mi casa y cuando serán adelantados estos procedimientos.*
- *Solicito a SAE-SAS me informe que derechos tengo frente a al entrega y desalojo de mi casa (Anexo 5) (...).*

10. En respuesta de lo anterior la SAE, le manifestó que el desalojo se realizará el día 10 de mayo de 2022, es decir apenas 5 días antes del desalojo forzado.

11. Por ultimo indica que ella atraviesa por una situación económica crítica, con mínimos ingresos económicos, situación que se ha agravado con la declaración de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 desde el año 2020 y que debe despertar su responsabilidad social.

B. PRETENSIONES

La presente acción de tutela contiene las siguientes pretensiones:

***“(...) TUTELAR** los derechos fundamentales a la vivienda en condiciones dignas y al respeto de la confianza legítima del accionante y familia y en consecuencia ordene: **PROTEGER** especialmente a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad en particular a mi como madre cabeza de hogar y a mi hijo Jonatan Toro Castaño, quien depende de mí.*

***ORDENAR** a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el respeto de todas las garantías procesales previstas en el derecho de los derechos humanos, incluyendo: “a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.*

***ORDENAR** a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS suspender la diligencia de desalojo y el procedimiento hasta tanto se garanticen las medidas para proteger los derechos de mi hijo en condición con discapacidad y mis derechos como mujer cabeza hogar (...).*



Radicado No. 20221500039481

Oficio No. DAJ-10400-

19/05/2022

Página 4 de 8

IV. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto del Fiscal General de la Nación.

En el presente caso debe examinarse si se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por pasiva, condición que, como ha señalado la Corte Constitucional, constituye un “[p]rincipio básico del derecho procesal por el cual se puede exigir la completa y correcta integración del contradictorio”².

Conforme a este presupuesto procesal, resulta necesaria la coincidencia de derecho entre el titular de la obligación demandada y el sujeto al que se reclama mediante la acción de tutela. La Corte Constitucional ha precisado esta condición en los siguientes términos:

“Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el denominado ‘legitimidad en la causa por pasiva’, las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas. No que - además de que se cumplan otros requisitos- exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama. La incongruencia o falta de identidad entre dichos sujetos, conduce usualmente al proferimiento de sentencias desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente perjudiciales para el demandante.

No obstante, las consecuencias de la indebida designación del demandado son diferentes en el marco de la acción de tutela, ya que la informalidad y agilidad con que la Carta reviste a dicha vía judicial, hacen que sea el propio juez, en su calidad de promotor de la actuación, quien tenga la obligación subsidiaria de corregir el error en que el demandante haya podido incurrir a la hora de denominar la persona o autoridad que, a su juicio, es responsable de la vulneración del derecho invocado. Lo que de común ocurre es que el demandante asuma por responsable de la vulneración a quien de manera inmediata o aparente resalta como tal, sin que en todos los casos dicha coincidencia sea real. Por ello es por lo que en el marco de este procedimiento de excepción, no puede exigírsele al demandante tal precisión en el manejo de los conceptos jurídicos; aunque sí, en cambio, debe encargarse al juez para que, en caso de que tal imprecisión suceda, la supla él mismo, con el conocimiento jurídico que se le presume, o echando mano de las herramientas probatorias que le da la ley”³.

En estos términos, la legitimación en la causa por pasiva requiere “la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción” de manera que se dirija “en contra de

² Corte Constitucional, Auto 283 de 2008.

³ Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.

quién ‘presuntamente violó o amenazó un derecho fundamental’ (...)”⁴, lo anterior porque corresponde al titular de la obligación demandada.

Aunque este requisito debe ser satisfecho por la accionante, se ha reconocido que compete al juez la obligación procesal de integrar en debida forma el contradictorio, en atención a la informalidad y agilidad del trámite de tutela.

De manera similar a lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado también ha concluido que “(...) no basta con ser objeto de demanda para concurrir legítimamente a un juicio, es imperioso estar debidamente legitimado para ello”⁵. Al respecto esa Corporación “ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material”. Sobre este punto, ese Alto Tribunal ha señalado:

“(...) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico (...).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye

⁴ Corte Constitucional, Sentencia T-597 de 2009.

⁵ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 8 de abril de 2014, Rad 76001233100019980003601 (29321). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”⁶(subrayas fuera del texto).

- **Caso concreto y conclusiones**

En el presente caso se observa que aunque ninguna de las pretensiones de la accionante se encuentran dirigidas a la Fiscalía General de la Nación ni al señor Fiscal General de la Nación, su H. Despacho dispuso su vinculación como accionado dentro del presente trámite constitucional, obviando en el auto admisorio de la tutela especificar que lo vinculaba, toda vez que solo dentro del cuerpo del correo en que se surte la notificación del mencionado auto aparece el nombre del señor Fiscal General de la Nación.

Así las cosas, y ante la imprecisión respecto de la vinculación en calidad de accionado del señor Fiscal General de la Nación, se procederá a señalar que este funcionario adolece de falta de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre los hechos materia de esta acción constitucional, toda vez que este servidor no es quien dispuso la entrega del inmueble en el que habita la accionante junto con sus hijos, ni tampoco tiene injerencia alguna respecto de las decisiones que adopte la Sociedad de Activos Especiales SAE en cuanto al manejo de los inmuebles que son objeto de extinción del derecho de dominio, atendiendo a la vinculación que estos hayan tenido sobre actividades ilícitas.

Igualmente se observa que únicamente se hace alusión a la Fiscalía General de la Nación dentro del hecho número 1.4 en el cual la accionante señala que la Fiscalía General de la Nación decidió de manera oficiosa iniciar el trámite de *extinción del derecho de dominio de su casa, así como su embargo y secuestro*, en atención a esta afirmación es prudente señalar que las investigaciones acerca de este asunto, no son de competencia del señor Fiscal General de la Nación, toda vez que esta atribución legal recae sobre los Fiscales especializados en esta materia, tal y como se prevé en el artículo 34⁷ del Código de Extinción de Dominio.

⁶ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 8 de abril de 2014, Rad 76001233100019980003601 (29321). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

7 Artículo 34. Competencia para la investigación

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia de extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación o de los fiscales que este delegue para esta materia. El Fiscal General de la Nación conocerá de la acción de extinción de dominio sobre bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático extranjero debidamente acreditado ante el Gobierno de la República de Colombia. Lo anterior, sin perjuicio de su facultad para delegar especialmente estos asuntos. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializado pertenecientes a las distintas seccionales, conocerán de la acción de extinción de dominio sobre bienes vinculados con las actividades ilícitas propias de su

En ese orden de ideas y como quiera que el señor Fiscal General de la Nación solamente tiene competencia para pronunciarse en estos asunto siempre y cuando se trate de bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado como tal ante el Gobierno Colombiano, por tal razón no es el encargado de tomar decisión acerca de la enajenación del inmueble de la accionante ubicado en el municipio de Marinilla – Antioquia sino que esta le compete al fiscal a quien le fue asignada esa noticia criminal.

Bajo la anterior línea argumentativa, debido a que el requerimiento de su honorable Despacho NO es de competencia del Fiscal General de la Nación, se concluye que debería ser desvinculado en este trámite; como quiera que se ha demostrado que, atendiendo a lo señalado en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar” los derechos fundamentales. Así pues, viene al caso colacionar el objeto de la acción de tutela, puesto que en la conducta descrita en los hechos de esta solicitud de amparo ha quedado retratado que el funcionario judicial representante de este ente investigador y acusador en ningún momento ha desplegado acciones que, “*violen*”, “*hayan violado*”, o “*amenace violar*” los derechos fundamentales de la tutelante.

Por tal motivo, comedidamente se solicita que se proceda a declarar improcedente la presente acción de tutela respecto del señor Fiscal General de la Nación y a su desvinculación de este trámite constitucional, como quiera que no existe legitimación en la causa por pasiva.

IV. PETICIÓN

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, solicito a su Honorable Despacho:

- PRINCIPALES:
- Declarar **IMPROCEDENTE** la acción de tutela respecto del Fiscal General de la Nación, por falta de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia, ordenar su **DESVINCULACIÓN** dentro de la presente acción constitucional.

competencia o relacionadas con estas. En los demás casos conocerán de la acción de extinción de dominio los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito.

Colombia Art. 34 Código de Extinción de Dominio

Lea más: https://leyes.co/codigo_de_extincion_de_dominio/34.htm



Radicado No. 20221500039481

Oficio No. DAJ-10400-

19/05/2022

Página 8 de 8

V. ANEXOS

Al presente memorial anexo los siguientes documentos:

- Resolución No. 0-0259 del 29 de marzo de 2022, “Por medio de la cual se reorganiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y se dictan lineamientos para el juzgamiento en los procesos disciplinarios de primera Instancia al interior de la Fiscalía General de la Nación.”
- Oficio Radicado 20221500004783 del 30 de marzo de 2022 por medio del cual se designa a la suscrita como Coordinadora de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales.

Cordialmente,

GABRIELA RAMOS NAVARRO

Coordinadora de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales
Dirección de Asuntos Jurídicos

Proyectó: María Fernanda Mendoza García.